

# Desaparición forzada, racismo institucional y pueblos indígenas en el caso Ayotzinapa, México

por MARIANA MORA | CIESAS – Ciudad de México | [mariana\\_mora@yahoo.com](mailto:mariana_mora@yahoo.com)

## Referencias

Ajcalón Choy, Rigoberto

2014 “Masculinity, Gender, and Power in a Mayan-Kaqchikel Community in Sololá, Guatemala.” Tesis de maestría, University of Texas at Austin.

Casaús, Marta Elena

2009 “El racismo y la discriminación en el lenguaje político de las elites intelectuales en Guatemala.” *Discurso & Sociedad* 3 (4): 592–620.

Cojtí Cuxil, Demetrio

2005 *El racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala*. Ajpop Mayab’ Tijonik. Guatemala: Consejo Nacional de Educación Maya.

González Ponciano, Jorge Ramón

2004 “Blancura, cosmopolitismo y representación en Guatemala.” Artículo presentado durante el VI Congreso Internacional de Estudios Mayas en Villahermosa, Tabasco, 15 de julio de 2004.

Hale, Charles R.

2004 “Rethinking Indigenous Politics in the Era of the ‘Indio Permitido.’” *NACLA Report on the Americas* 38 (2): 16–21. Report on Race, Part 1.

2007 “*Más que un indio*”: *Ambivalencia racial y multiculturalismo neoliberal en Guatemala*. Guatemala: AVANCSO, 2007.

Johnston, Bárbara Rose

2005 *Tomo uno: Estudio de los elementos del legado de la represa chixoy. Resumen ejecutivo: Daños emergentes y reparaciones: recomendaciones para el recurso*. Guatemala: Centro para la Ecología Política. ■

En el transcurso del mes de abril 2017 se publicará un diagnóstico sobre las principales afectaciones psicosociales de los ataques del 26 y 27 de septiembre, 2014, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, México en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa, asesinados tres de sus compañeros y heridos 40, algunos de gravedad. Desde los días posteriores a los actos violentos, el caso de Ayotzinapa ha detonado respuestas masivas de solidaridad en todo el hemisferio y en otras regiones del mundo. A pesar de las movilizaciones multitudinarias, los esfuerzos incansables de los familiares, junto con sus abogados, incluyendo activar la participación de actores clave de organismos internacionales de los derechos humanos que pocos casos logran conseguir, aún se desconoce el paradero de los normalistas indígenas y campesinos. El diagnóstico, elaborado en respuesta a las recomendaciones emitidas por uno de estos actores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, busca contribuir información empírica relevante para elaborar mecanismos de atención a las víctimas de los hechos de Iguala a partir de lo que es significativo para las propias víctimas.<sup>1</sup> Publico aquí elementos del documento relacionados con los familiares que pertenecen a pueblos indígenas dado su relevancia en aportar a discusiones aun incipientes en México sobre cómo víctimas indígenas de violaciones graves a los derechos humanos señalan el papel que tienen el racismo y otras exclusiones históricas en los impactos de los sucesos, junto con las prácticas culturales que les ayudan a continuar en sus luchas por la justicia y la verdad.

Aunque estudios que identifican los sentidos de los agravios, los impactos

y expresiones de resiliencia de víctimas indígenas y afro-descendientes en casos de graves violaciones a los derechos humanos se han realizado en otros países de latinoamericana, particularmente en Colombia y Guatemala, es un campo poco explorado en México.<sup>2</sup> Ello a pesar de la crisis de violencia extrema que azota el país desde hace más de una década, incluyendo en regiones indígenas. En el caso concreto de Ayotzinapa, numerosas publicaciones, estudios y notas periodísticas resaltan el hecho de que las víctimas son campesinos de las regiones más empobrecidas del país, pero pocos detallan que una parte de los familiares pertenecen a los pueblos indígenas na savi (mixteco), me’phaa (tlapaneco), nahua y huave.

Como antropóloga fui invitada a participar –junto con tres psicólogas sociales y un médico– a realizar el estudio coordinado por la organización mexicana, Fundar Centro de Análisis e Investigación. Visibilizar las afectaciones y mecanismos de afrontamiento propios de las víctimas indígenas fue un reto significativo, no solo por los pocos referentes nacionales sobre el tema, sino porque no existe una línea tan marcada entre víctimas campesinos e indígenas, por lo contrario, existe un entorno compartido de extrema marginación, incluyendo experiencias de actos de violencia física, exclusiones socio-económicas y discriminaciones de distintos índoles.<sup>3</sup> Tanto los familiares mestizos como indígenas describieron experiencias de violencias estructurales y físicas de su pasado para explicar como han vivido los sucesos de Iguala así como el tipo de trato denigrante que han sufrido en sus interacciones con funcionarios públicos durante las investigaciones del caso. En ese sentido, es relevante entender que para la mayoría de los familiares de los jóvenes normalistas los hechos del 26 de septiembre no figuran como un acto violento aislado

del conjunto de las experiencias de vida, sino se insertan en una acumulación de violencias a lo largo de sus vidas.

¿Dado este terreno compartido de exclusiones sistemáticas y de violencias estructurales, cómo entonces aproximarnos a las afectaciones desde los sentidos específicos que otorgan los familiares que pertenecen a pueblos indígenas?

En México, hablar una lengua indígena se utiliza en los censos oficiales para determinar la identidad indígena, por lo tanto el factor lingüístico resulta ser el punto de entrada más evidente. Ninguna de las reuniones con las instancias gubernamentales que los familiares han tenido a lo largo de más de dos años ha incluido el acceso a un interprete para que ellos se puedan expresar en su lengua materna y entender todo lo comunicado en español. Sin embargo, las exclusiones derivadas de la negación a sus derechos lingüísticos fue solo un aspecto de un racismo institucional más amplio señalado por los familiares. No solo resaltaron las condiciones de pobreza extrema, sino las formas en que funcionarios públicos intentan manipular la falta de dominio del español y el hecho de que viven en regiones aisladas, como si estas condiciones les hicieran tener pocas capacidades mentales. Para ofrecer tan solo un ejemplo, en el diagnóstico se incluye un extracto de una entrevista en que un familiar nahua interpreta porque distintos funcionarios públicos han insistido en ofrecerle dinero por la desaparición de su hijo a pesar de que él repite que no quiere dinero, quiere conocer dónde se encuentra y qué pasó:

“Pues para mi es parte del gobierno. [Una funcionaria pública] claro dijo que nos va a llevar con Osorio Chong [Secretario de Gobernación], ´tan trabajando juntos pues. Por eso ella hace el ‘favor’ de que me lleve el dinero. [Osorio Chong le dijo] dale

muchas palabras, coméntale para enredarlo un poco, vas a ver que así va a aceptar ese dinero. Yo no tengo mucho estudio, solo hasta 3er año de primaria. Pensaba que [como campesinos indígenas] que muy fácil nos podía convencer... Ya no saben qué inventar más, piensan que nosotros como campesinos y gente indígena que con sus palabras ya nos convencieron.”

Las familiares indígenas apuntaron a su vez hacia mecanismos propios de afrontamiento, lo que les da la fuerza y el ánimo para seguir luchando. Psicólogos sociales señalan que la desaparición forzada genera lo que llaman un duelo alterado dado que se desconoce si el ser querido sigue vivo o está muerto, por lo tanto no se puede acomodar la ausencia. Esta incertidumbre extrema coloca a los familiares en un espacio liminal, entre seguir con la esperanza que sus seres queridos están vivos y el temor que no sea el caso. De cara a estas angustias, los familiares de los desaparecidos han trazado una ruta que trasciende la división marcada entre los espacios en sus pueblos en que se vela por los muertos y los dedicados a los vivos. Aunque siguen luchando por su aparición con vida, han optado por recurrir a los rezos y ofrendas en sus hogares y en lugares sagrados para cuidar las almas y los espíritus de sus hijos, independientemente del estado en que se encuentran. Activan prácticas, sobre todo las ofrendas, que protegen las almas de sus hijos, que piden la intervención de las potencias sagradas para que tengan la fuerza para salir del peligro y encuentren su camino a casa. Al mismo tiempo, los rezos y las ofrendas les otorgan fuerza a los familiares y los protege frente a los peligros que enfrentan como parte de la búsqueda por sus hijos.

Este tipo de elementos plasmados en el diagnóstico –producto de un estudio interdisciplinario elaborado con la

participación activa de las víctimas– coloca como aspecto fundamental de las discusiones sobre el caso las formas en que el racismo institucional y estructural intensifican como las víctimas indígenas viven la desaparición forzada de sus hijos y ofrece información para que los propios familiares fortalezcan determinadas prácticas culturales que les continúan dando fuerza. ¿De qué manera hablar del racismo como parte de las afectaciones de casos de desaparición forzada genera nuevas estrategias jurídico-políticas y abre otras exigencias de cara al estado? ¿De qué forma explicitar las prácticas culturales propias puede potencializar los mecanismos de afrontamiento de los familiares? Las respuestas a este tipo de preguntas permiten seguir haciendo un uso crítico y ampliado del derecho como parte de la lucha por la justicia y la verdad en el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y miles de otros casos de desaparición forzada en México.

#### Notas

- <sup>1</sup> El GIEI publicó dos informes, el primero en septiembre 2015 y el segundo en abril 2016. Como parte de las recomendaciones de este segundo informe, sugiere que se crea un equipo independiente para realizar un estudio del impacto psicosocial y en la salud en las víctimas del caso Ayotzinapa con la finalidad de articular un programa de atención a las víctimas, de acuerdo a los distintos procesos que han vivido y sus necesidades particulares. Ambos informes se pueden consultar en línea. El primer informe: <http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-ayotzi.pdf> ; el segundo, <https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf>.
- <sup>2</sup> Dichos avances incluyen publicaciones sobre reparaciones y pueblos indígenas y afro-descendientes. Referirse a: N. Gómez, “Indigenous Peoples and Psychosocial Reparation: The Experience with Latin American Indigenous Communities”, en *Reparations for Indigenous Peoples*:

## Rebellion in the Brazilian Graveyard: Our Dead Have a Voice!

by JAIME AMPARO ALVES | College of Staten Island & Ceaf-ICESI | Jaime.alves@csi.cuny.edu

and DÉBORA MARIA SILVA | Mães de Maio & Universidade Federal de São Paulo | debi1977@gmail.com

*International and Comparative Perspectives*, ed. Federico Lenzerini (Oxford: Oxford University Press, 2008); F. Lenzerini, “Reparations for Indigenous Peoples in International and Comparative Law”, en *Reparations for Indigenous Peoples*; Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, *Formas de incorporación del tratamiento diferencial a víctimas de pueblos indígenas en procesos de justicia transicional en Latinoamérica: Memoria analítica*, Mesa 16, agosto 5–6 de 2010 (RELAJU, 2010); C. Rodríguez Garavito y Y. Lam, *Etnorreparaciones: La justicia étnica colectiva y la reparación a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia* (Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010); L. Viaene, “Voices from the Shadows: The Role of Cultural Contexts in Transitional Justice Processes Maya Q’eqchi’ Perspectives from Post-Conflict Guatemala”, Tesis doctoral, Ghent University, Belgium, 2010.

<sup>3</sup> Para leer sobre las historias de vida de los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos, y sus familiares, referirse al libro, *Ayotzinapa, la travesía de las tortugas: La vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014* (Ciudad de México: Ediciones Proceso, 2015). ■

Although Brazil has not been in a formal war since the military conflict with Paraguay (1864–1870), when the Brazilian Army joined forces with its Argentinean and Uruguayan counterparts in exterminating half of the Paraguayan population, there is a permanent war against the poor and Afro-Brazilian population. Brazil kills more civilians than any other country in “peacetime,” and although the police are not responsible for all “casualties,” they are the main face of a delinquent state that supports, sanctions, and carries on extermination policies against the most vulnerable sector of the population. What can we expect from an institution whose lineage can be traced back to the history of colonialism?

Statistics on police killings become obsolete very quickly in Brazil. Brazilians have become sinisterly used to slaughters by the police, at times broadcasted live on prime time TV. Cases abound: five black teens killed with 111 shots fired when passing through a police checkpoint; an individual kidnapped by the police and forced to dig his own grave before being killed; dismembered bodies given to pigs; denial of rescuing wounded “criminals” to the emergency room; and the too-familiar

disappearance of favela residents who later are found in clandestine cemeteries.

The practices of the Brazilian police force supersede the most macabre imagination and turn Brazil into an open graveyard. From the Argentinean border to the north limit with Guyana and Venezuela, Brazil’s expansive territory is a geography of police terror, nightmares, anguish, and community destruction. Faithful to its founding genocide, the Brazilian state’s preferential victims are the indigenous, black, and nonwhite populations, historically crafted as the threat to social order. The numbers are consistent with the Brazilian racial project: according to the Brazilian Forum of Public Security, police kill an average of nine individuals every day. Between 2008 and 2015 the police killed 19,494 civilians. Approximately 45 percent of these deaths were concentrated in the states of São Paulo and Rio de Janeiro.<sup>1</sup> Imagine, if you can, a “democratic” society with such normalized levels of violence. What makes police terror so acceptable in Brazil?

Killings by the police are so rampant in Brazil that they account for 1.5 percent of the already astounding levels of violent deaths that plague the country.



The black movement protest in downtown São Paulo, March 12, 2015. Banner says: “I can’t breathe! Black youth want to live.” Photos by Uneafró-Brasil